

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA



SALA SEGUNDA DE ORALIDAD
MAGISTRADA PONENTE: BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ

Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veinte (2020)

PROCESO	CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD
DEMANDANTE	MUNICIPIO DE OLAYA-ANTIOQUIA
DEMANDADO	DECRETO 041 DEL 17 DE MARZO DE 2020 DEL MUNICIPIO DE OLAYA-ANTIOQUIA
RADICADO	05001 23 33 000 2020 01080 00
ASUNTO	NO SE AVOCA CONOCIMIENTO DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Se somete a estudio de este Despacho el control de legalidad del Decreto No. 041 del 17 de marzo de 2020 *“Por medio del cual se modifica temporalmente la jornada laboral de la administración central del Municipio de Olaya-Antioquia, con ocasión al aislamiento y distanciamiento social, para establecer medidas preventivas con respecto a limitar la propagación del COVID-19”*, previo a avocar conocimiento es preciso hacer las siguientes,

CONSIDERACIONES

El control inmediato de legalidad se encuentra contemplado en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medio de control que recae sobre las decisiones administrativas de carácter general proferidas por el Presidente de la República o las entidades territoriales en desarrollo de los decretos legislativos que se expidan en un Estado de Excepción, disponiendo dicho artículo de forma textual lo siguiente:

“ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad,

ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento”.

El capítulo 6 de la Constitución Política contempla los Estados de Excepción, los mismos que se encuentran descritos en los artículos 212 y 213 de dicho estatuto, como son el **Estado de Guerra Exterior** y el **Estado de Conmoción Interior**, sin embargo, cuando se presentan circunstancias distintas a las allí contempladas, en las cuales se “*perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública*” la Carta Política en el artículo 215 autoriza al Presidente de la República para declarar el **Estado de Emergencia**, permitiendo la expedición de Decretos que considere necesarios para conjurar la crisis.

Disposición normativa que textualmente consagra lo siguiente:

“ARTICULO 215. *Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.*

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.

El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

PARAGRAFO. *El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumple con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento".*

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aquellas medidas dictadas en virtud de los Decretos Legislativos proferidos durante los Estados de Excepción, tienen un control inmediato de legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del lugar de su expedición, si se trata de entidades territoriales y por el Consejo de Estado cuando se trata de autoridades Nacionales.

Debiéndose advertir finalmente que, para ejercer dicho control, primeramente, deben verificarse el cumplimiento de tres requisitos, para determinar la competencia de la corporación respecto al conocimiento del asunto, los mismos que se encuentran contemplados en el artículo 151 numeral 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¹.

¹“**ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA INSTANCIA.** Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

Caso concreto:

Así las cosas, se tiene que el 27 de marzo de 2020 el Secretario General y de Gobierno del Municipio de Olaya-Antioquia envió a esta Corporación para su respectivo control, el Decreto No. 041 del 17 de marzo de 2020 *“Por medio del cual se modifica temporalmente la jornada laboral de la administración central del Municipio de Olaya-Antioquia, con ocasión al aislamiento y distanciamiento social, para establecer medidas preventivas con respecto a limitar la propagación del COVID-19”*, expedido por el Alcalde del Municipio de Olaya-Antioquia.

El día 20 de abril 2020, la Secretaria de la Corporación envió por correo electrónico del Despacho, el reparto del control inmediato de legalidad del Decreto 041 del 17 de marzo de 2020 del Municipio de Olaya-Antioquia, para la sustanciación del trámite respectivo.

El Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

El artículo 4 del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, señaló respecto a la vigencia que empieza a regir a partir de su publicación, la cual se llevó a cabo en el Diario Oficial No. 51259 el 17 de marzo de 2020².

El Decreto No. 041 del 17 de marzo de 2020 *“Por medio del cual se modifica temporalmente la jornada laboral de la administración central del Municipio de Olaya-Antioquia, con ocasión al aislamiento y distanciamiento social, para establecer medidas preventivas con respecto a limitar la propagación del COVID-19”*, fue expedido el 17 de marzo de 2020, el mismo día que fue expedido y empezó a regir el Decreto Presidencial No. 417 del 17 de marzo de 2020.

En el texto del Decreto No. 041 del 17 de marzo de 2020 *“Por medio del cual se modifica temporalmente la jornada laboral de la administración central del Municipio de Olaya-Antioquia, con ocasión al aislamiento y distanciamiento social, para establecer*

(...)

14. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan”.

² Consultado el día 31 de marzo de 2020 en la página web: svrpubindc.imprenta.gov.co

medidas preventivas con respecto a limitar la propagación del COVID-19”, se lee que tiene como fundamento, la Circular 0018 del 10 de marzo del Ministerio del Trabajo, mediante la cual se adoptaron una serie de medidas para contener el avance del Coronavirus respecto a la flexibilización de horarios de trabajo y el teletrabajo y la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual se declaró la emergencia sanitaria en el Territorio Nacional.

Ahora es claro que la Circular 0018 del 10 de marzo de 2020 y la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, son anteriores a la declaratoria de estado de excepción del Presidente de la Republica mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

En tanto el Decreto 041 del 17 de marzo de 2020 fue proferido en virtud de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social y no en virtud del estado de excepción.

Por lo anterior es claro que el Decreto No. 041 del 17 de marzo de 2020 *“Por medio del cual se modifica temporalmente la jornada laboral de la administración central del Municipio de Olaya-Antioquia, con ocasión al aislamiento y distanciamiento social, para establecer medidas preventivas con respecto a limitar la propagación del COVID-19”,* **NO** fue proferido en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y que se encuentra contenido en el Decreto 417 del 17 de marzo 2020, porque el decreto objeto de control fue expedido el mismo día que el decreto presidencial que declaró el estado de excepción, por lo tanto, no resulta procedente adelantar el control inmediato de legalidad.

En resumen, al no cumplirse con los requisitos mínimos necesarios para iniciar el trámite del Control Inmediato de Legalidad en los términos del numeral 3° del artículo 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y dado que el Decreto 041 del 17 de marzo de 2020 del Municipio de Olaya-Antioquia fue expedido el mismo día que se declaró el estado de excepción, no se avocará el conocimiento en el asunto de la referencia.

En mérito de lo expuesto, **el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA UNITARIA,**

RESUELVE:

PRIMERO: NO AVOCAR conocimiento de control inmediato de legalidad del Decreto No. 041 del 17 de marzo de 2020 *“Por medio del cual se modifica temporalmente la jornada laboral de la administración central del Municipio de Olaya-Antioquia, con ocasión al aislamiento y distanciamiento social, para establecer medidas preventivas con respecto a limitar la propagación del COVID-19”* proferido por el Alcalde Municipal de Olaya-Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Contra el aludido acto administrativo general, procederán los medios de control pertinentes, en aplicación con el procedimiento regido en la Ley 1437 de 2011 o demás normas concordantes.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

CUARTO: Notificar esta providencia por correo electrónico al Representante legal del Municipio de Olaya-Antioquia o a quien este haya delegado para recibir notificaciones.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ

MAGISTRADA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
EN ANOTACIÓN POR ESTADOS DE HOY

22 DE ABRIL DE 2020

FUE NOTIFICADO EL AUTO ANTERIOR


SECRETARÍA GENERAL